



Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Seguridad Social para la realización de trámites y actuaciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto la regulación de los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Seguridad Social, creado en virtud de la habilitación derivada de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuyo apartado 1 dispone “a los efectos exclusivos de la actuación electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes y sin carácter de registro público, se crea, en su ámbito, el registro electrónico de apoderamientos. En él, se podrán hacer constar las representaciones que los interesados otorguen a terceros para actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes”, teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Ley 11/2007 dispone que “las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación”. El citado artículo 15.2 dispone que “El Ministerio de la Presidencia creará los ficheros de datos personales necesarios y gestionará dicho registro, que deberá coordinarse con cualquier otro similar existente de ámbito más limitado en la Administración General del Estado”.

En este sentido, debe igualmente tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos, que fue objeto de informe favorable por parte de esta Agencia en fecha 22 de diciembre de 2011.

Desde el punto de vista de la aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 resulta relevante la previsión contenida en el artículo 11 del



Proyecto sometido a informe, en el que se establece que “Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, cuando el poderdante o el apoderado fueran personas físicas, deberá constar su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos. Este consentimiento dejará a salvo el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación establecidos en la citada Ley”.

Dicha disposición resulta parcialmente similar a la contenida en el artículo 12 de la Orden HAP/1637/2012, objeto de informe favorable de esta Agencia, si bien no se incluye en el primer inciso la aclaración de que el consentimiento al tratamiento se referirá a aquél “que resulte necesario para el adecuado funcionamiento del Registro de apoderamientos”.

A juicio de la Agencia, dado que el consentimiento debe aparecer vinculado no sólo al hecho mismo de que se lleve a cabo el tratamiento sino a la finalidad perseguida por el mismo, sería necesario que se incluyese una cláusula similar en el Proyecto ahora informado. En este sentido, debe recordarse que el artículo 3 h) de la Ley Orgánica 15/1999 define el consentimiento del interesado como “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

Al propio tiempo, será preciso que en los formularios que se aprueben en desarrollo del Proyecto sometido a informe se incorporen las correspondientes cláusulas informativas, que deberán reunir los requisitos establecidos por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica, según el cual “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Por otra parte, la disposición adicional única procede a la creación del fichero del registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social, que cumple en gran medida con las previsiones exigidas por el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 15/1999, si bien sería preciso efectuar las siguientes aclaraciones:



- Deberían especificarse los usos propios del fichero en términos similares a los establecidos en el Anexo IV de la Orden HAP/1637/2012 que señala que los datos se emplearán para la “Comprobación de la representación en los trámites y actuaciones por medios electrónicos que la incorporen”.
- En cuanto a la estructura del fichero debería indicarse que el mismo incorporará los datos relacionados a la extensión del poder y su vigencia.
- En el apartado de cesiones, los datos serán lógicamente transmitidos a las Direcciones Generales, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, de conformidad con el ámbito de aplicación del propio Registro.
- Por último será preciso completar el apartado referido al lugar donde los interesados podrán ejercitar sus derechos incluyendo la referencia al derecho de oposición y las direcciones postal o electrónica en que dichos derechos podrán ejercitarse.